

Señores.

JUZGADO TERCERO (3º) CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO

i03ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO VERBAL
RADICADO: 520013103003-2024-00224-00
DEMANDANTE: SAMUEL MAURICIO ASTAIZA CHÁVES
DEMANDADOS: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO

**ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** identificada con NIT 890.903.407-9, representada legalmente por **MARÍA ALEJANDRA PEREIRA** como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, presento **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA** promovida por **SAMUEL MAURICIO ASTAIZA CHÁVES** en contra de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO**, así mismo presento **CONTESTACIÓN A LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** promovido por el señor **JAIRO AUGUSTO CABRERA ERAZO** en frente a mi prohijada, anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrime a continuación.

CAPITULO I
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO 1: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronunciaré frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- a. A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser probado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, se destaca que el Informe Policial de Accidente de Tránsito que reposa en el expediente se deja ver que el 08 de enero de 2023 aconteció un accidente de tránsito que involucró los vehículos de placas EQS583 y GDO834, conducidos en su orden, por Jairo Augusto Cabrera Erazo y Samuel Mauricio Astaiza Chávez.
- b. A mi representada no le consta de manera directa la edad ni las supuestas lesiones padecidas por el señor Samuel Mauricio Astaiza, comoquiera que dichas situaciones resultan completamente ajenas al giro ordinario de sus negocios. Todo lo narrado debe ser probado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Sin perjuicio de ello, se advierte que en el plenario no milita fotocopia de la cédula de ciudadanía o del registro civil de nacimiento del demandante que acredite su edad para los hechos objeto de litigio.

AL HECHO 2: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho,

comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Sin embargo, debe resaltarse que en el contrato de prestación de servicios No. 046-2023 aportado por el extremo actor se pactó el plazo de ejecución de un mes y veintinueve días y, en ese sentido, no es dable tomar ese contrato como prueba de una generación de ingresos constante por parte del actor, máxime cuando la parte demandante no aporta otros medios de prueba que permitan colegir la actividad económica del señor Samuel Mauricio Astaiza. Véase:

CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.** - El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 28 de febrero de 2023, esto es un (01) mes y veintinueve (29) días, que inician a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y que forma parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**- EL

Documento: Contrato de Prestación de Servicios No. 946-2023. Folio 207-213 del escrito contentivo de la subsanación de la demanda.

Lo esgrimido en precedencia ha de ser valorado en conjunto con la información que reposa en la Base de Datos Única de Afiliados — BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, según la cual el señor Samuel Mauricio Astaiza se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado de Salud desde el 12 de marzo de 2021, esto es, con anterioridad a los hechos que suscitaron la controversia que nos atañe. Véase:


ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1061780150
NOMBRES	SAMUEL MAURICIO
APELLIDOS	ASTAIZA CHAVES
FECHA DE NACIMIENTO	**/****
DEPARTAMENTO	NARIÑO
MUNICIPIO	PASTO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A. -CM	CONTRIBUTIVO	12/03/2021	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: | 06/26/2025 17:19:41 | Estación de origen: | 192.168.70.220

Fuente: Consulta en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

AL HECHO 3: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora. Todo lo narrado debe ser acreditarse por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Sin embargo, la información se corroborará con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito aportado con el escrito genitor del proceso.

AL HECHO 4: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora. Todo lo narrado debe acreditarse por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante,

debe precisarse que la afirmación del vocero judicial está basada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presentó en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis, que según la Real Academia Española es la “suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”.

AL HECHO 5: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Sin embargo, se advierte que la última anotación registrada en la historia clínica que milita en el expediente data del 20 de diciembre de 2023, por lo tanto, no puede tenerse por cierto que el señor Samuel Mauricio Astaiza actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

AL HECHO 6: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

AL HECHO 7: Es cierto que mi prohijada expidió la Póliza de Seguro Plan Utilitarios Y Pesados No. 900000757313 para amparar los daños a terceros originados por la conducción del vehículo de placas EQS583. Pese a lo anterior, se debe indicar que la mera existencia del contrato de seguro, no se traduce en la generación automática de una obligación indemnizatoria a cargo de mi representada.

Es menester resaltar que el surgimiento de cualquier obligación indemnizatoria a cargo de mi representada se encuentra condicionada a que se pruebe: (i) la realización del riesgo asegurado, en este caso, la estructuración de la responsabilidad civil que se pretende atribuir en cabeza de la parte demandada, (ii) que los hechos hubieran ocurrido dentro de la vigencia de la póliza y (iii) que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro como la prescripción, entre otras. Solo de llegarse a cumplir los requisitos expuestos de manera concurrente, habría lugar a que nazca una obligación indemnizatoria en cabeza de mi amparada.

AL HECHO 8: No es cierto que se presentó reclamación ante mi representada. Para estructurar una verdadera reclamación resulta ineludible acreditar los presupuestos del artículo 1077 del Código de Comercio, esto es, la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida. Lo que el apoderado presentó fue una mera solicitud de indemnización que en todo caso fue negada por no haberse acompañado de documentos que acreditarán la configuración de los perjuicios reclamados ni mucho menos su cuantía.

AL HECHO 9: Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronunciaré frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- a. Se rechaza el término “reclamación” pues, se reitera, para que la solicitud remitida por el extremo activo hubiera tenido tal calidad, requiere acreditar los presupuestos del artículo 1077 del Código de Comercio y en el caso objeto de estudio no se cumplieron las cargas de la disposición normativa precitada.
- b. Es cierto que se negó la solicitud de indemnización presentada por la parte actora debido a que no se remitieron medios probatorios que acreditaran la cuantía pretendida.

AL HECHO 10: Es parcialmente cierto, pues si bien sí se celebró la conciliación en dicha fecha. No es cierto que solo haya versado sobre los daños del vehículo, toda vez que las pretensiones estaban

encaminadas al reconocimiento de los daños materiales e inmateriales en favor del demandante.

AL HECHO 11: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, Todo lo narrado debe acreditarse por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, debe precisarse que el extracto del informe referido está basado en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”).

AL HECHO 12: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, Todo lo narrado debe acreditarse por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, lo aducido por la parte actora se verifica con la documentación que obra en el plenario.

AL HECHO 13: A mi representada no le consta de manera directa que la aflicción padecida por el señor Samuel Mauricio Astaiza sea con ocasión a los hechos presentados el 08 de enero de 2023, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, Todo lo narrado debe acreditarse por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

AL HECHO 14: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, Todo lo narrado debe acreditarse por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

ME OPONGO a la totalidad de las pretensiones incoadas por la parte demandante, por cuanto las mismas carecen de fundamentos facticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que al hacer la narración de los supuestos hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró, por cuanto la parte accionante no asistió a su deber procesal de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, y el nexo de causalidad entre uno y el otro. Siendo así, en este proceso se incumplieron las cargas imperativas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio.

III. OPOSICIÓN FRENTE A TODAS LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y DE CONDENA

FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO a la prosperidad de la pretensión de declarar civil y solidariamente responsable al extremo pasivo del litigio en atención a que al interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios reclamados por la parte demandante. No está probado que el accidente de tránsito ocurrido el 08 de enero de 2022 hubiere devenido de una conducta culposa del conductor del vehículo asegurado, la parte actora basa sus infundadas pretensiones de forma única y exclusiva en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (en adelante, “IPAT”), documento que carece de virtualidad para dictaminar una responsabilidad como la pretendida por los demandantes.

En todo caso es preciso anotar que esta pretensión no tiene vocación de prosperidad frente a mi representada, habida cuenta que no hay lugar a que se declare a mi procurada solidariamente responsable del evento materia de controversia, pues no intervino en la producción del mismo, ni es la

causante del daño, ni ostenta la calidad de propietaria del vehículo involucrado, así como tampoco es la contratante o empresa transportadora, ni empleadora del conductor, sino que su vinculación al presente proceso se produce como consecuencia de un contrato de seguro, en donde obra como asegurado el señor JAIRO AUGUSTO CABRERA ERAZO.

Por lo tanto, la acción que vincula al asegurador no es la aquiliana de que trata el Código Civil y por tanto no le es aplicable la solidaridad que indica el Código del Comercio para el contrato del transporte, pues esta se predica es para el conductor, el propietario y la empresa transportadora. Adicionalmente, en el contrato de seguro materializado en la Póliza de Seguro Plan Utilitarios Y Pesados No. 900000757313 no se pactó solidaridad alguna. Por lo que no existe fundamento legal o contractual que imponga una obligación solidaria a mi representada.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión toda vez que es condicional y consecuencial a la declaración de la pretensión primera, la cual, como se señaló, se encuentra avocada a su fracaso y en consecuencia no hay lugar a acceder a la pretensión condenatoria. Sin perjuicio de ello, me pronuncio frente a los perjuicios solicitados en la demanda de la siguiente manera:

A. OPOSICIÓN FRENTE AL DAÑO EMERGENTE

ME OPONGO al reconocimiento de las sumas pretendidas bajo este concepto debido a que, por una parte, no se aportó prueba documental que demuestre que efectivamente se causaron erogaciones por insumos médicos no cubiertos por la EPS pues, si bien en el escrito de demanda se hace referencia a “facturas canceladas”, las mismas no fueron allegadas. Por la otra, tampoco se encuentra acreditada la frustración de los honorarios devengados con ocasión al mentado contrato de prestación de servicios, lo cual en todo caso haría parte de la estimación de lucro cesante y no de perjuicios por concepto de daño emergente.

B. OPOSICIÓN FRENTE AL LUCRO CESANTE

ME OPONGO al reconocimiento de las sumas pretendidas bajo este concepto toda vez que no puede tenerse como base de liquidación la suma de \$2.100.000 pues se tasó con base en un contrato de prestación de servicios con plazo definido de un mes y veintinueve días, máxime cuando incluso no se referenció contratos previos y la información que registra en el ADRES indica que el señor Samuel Mauricio Astaiza se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado de Salud desde el 12 de marzo de 2021, esto es, con anterioridad a los hechos que suscitaron la controversia que nos atañe. Finalmente, la parte actora liquida el lucro cesante desde el 08 de enero de 2024 y, a su vez, solicita el pago de los honorarios derivados del contrato de servicios suscrito con el Centro de Salud San Isidro E.S.E., desconociendo que reconocer simultáneamente ambas tipologías de daño pretendidas quiebran el principio de reparación integral por pagarse dos veces el mismo monto indemnizatorio.

En adenda a lo anterior, el señor SAMUEL MAURICIO ASTAIZA CHAVES omitió allegar declaración de renta, constancia de los pagos, desprendibles de nómina y en general, la parte demandante no aporta ningún documento conducente, pertinente, ni útil que demuestra un ingreso dejado de percibir.

C. OPOSICIÓN FRENTE AL DAÑO MORAL

ME OPONGO a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Así, el reconocimiento del daño moral es improcedente por cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, no

reconoce los valores de forma arbitraria y debe tenerse en cuenta un límite máximo establecido en caso de muerte para el primer nivel o grado sanguíneo, supuesto distinto al caso de marras por cuanto la lesión padecida por el señor Samuel Mauricio Astaiza se catalogó como unca incapacidad permanente parcial. Y, segundo, el valor pretendido por el demandante es exorbitante y no se encuentra corroborado mediante los medios de prueba útiles, conducentes y pertinentes. En este caso, la suma de 40 SMLMV (\$52.000.000) para el demandante es exagerada y revela un afán de lucro injustificado.

FRENTE A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo.

Adicionalmente, esta pretensión es a todas luces antitécnica. Ello, porque no puede acumularse la indexación monetaria con el pago de los intereses puesto que ambos conceptos tienen la misma finalidad, la cual es mitigar el poder adquisitivo del dinero. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia, en un caso que se puede aplicar análogamente al presente, afirmó:

*“(…) Puestas de ese modo las cosas, puede concluirse que la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de éstos, puesto que, si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. **Pero si el interés ya comprende este concepto (indexación indirecta), se resalta de nuevo, imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble –e inconsulta- condena por un mismo ítem,** lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, (...)”.*¹ — (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Así las cosas, además de lo que ya se establecido, esta pretensión no debe ser tenida en cuenta pues la indexación de la moneda no se puede acumular con los intereses moratorios.

FRENTE A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo.

Frente al momento en el que se empiezan a causarse los intereses moratorios, la Corte Suprema de Justicia ha establecido en distintas oportunidades que éstos empiezan a causarse a partir de la ejecutoria del fallo judicial que da certeza a la obligación. Específicamente, en la reciente sentencia del 26 de mayo de 2021, en la que se indicó textualmente:

*“Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo”*²

Lo anterior, deja claro que la pretensión de la demandante en este caso no tiene vocación de prosperidad, puesto que los intereses moratorios podrían empezar a causarse solo hasta que el fallo

¹ Corte Suprema de Justicia. Sentencia 41392 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez

² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC1947-2021 del 26 de mayo de 2021. M.P. Alvaro Fernando García Restrepo.

judicial brinde certeza sobre la obligación. Toda vez que antes de proferirse el fallo, no existe certeza sobre la obligación de indemnizar.

FRENTE A LA PRETENSIÓN QUINTA: ME OPONGO a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo. En su lugar, solicito se condene en costas y agencias en derecho al extremo actor.

IV. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso, y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos.

En el presente caso, el demandante presentó los siguientes valores por concepto de perjuicios patrimoniales:

Daño emergente: \$6.428.799, discriminado de la siguiente manera:

1. \$2.228.799, por gastos de insumos médicos no cubiertos por la EPS.
2. \$4.200.000, por los honorarios dejados de percibir con ocasión al contrato de prestación de servicios suscrito con el Centro de Salud San Isidro E.S.E.

Lucro cesante: \$148.233.451

Se precisa que, a efectos de liquidar el lucro cesante, el demandante tomó el valor de los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Centro de Salud San Isidro E.S.E. (2.100.000), tuvo en cuenta el porcentaje de Pérdida de Capacidad Laboral (36.21%), la fecha del accidente (08 de enero de 2023), la vida probable para una persona de 27 años y utilizó la fórmula matemática para tal efecto.

Indicado lo anterior, se objeta el juramento estimatorio en los siguientes términos:

1. En primer lugar, no es dable reconocer suma alguna por concepto de daño emergente puesto que no se aportaron medios probatorios tendientes a acreditar los gastos relativos a los insumos médicos no cubiertos por la EPS pese a que se anunciaron en el libelo de demanda.
2. De manera similar, no hay lugar al pago de los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Centro de Salud San Isidro E.S.E., bajo el entendido de que no se hizo referencia ni se probó la frustración económica del contrato. Aunado al hecho de tratarse de un concepto que se enmarca dentro del lucro cesante y no del daño emergente.
3. Ahora bien, en relación con el lucro cesante, es erróneo tomar como base de liquidación los honorarios devengados por el periodo temporal comprendido por un mes y veintinueve días para la proyección de la ganancia futura pues con los documentos aportados no se puede colegir que el señor Samuel Mauricio Astaiza devengara en un futuro dicha suma, máxime teniendo en cuenta que conforme a la información que reposa en ADRES, el señor Astaiza se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud con anterioridad a los hechos del 08 de enero de 2023.

4. Finalmente, el apoderado pretende simultáneamente el lucro cesante desde el 08 de enero de 2023 y los honorarios dejados de percibir en el mismo periodo, razón por la cual se estaría pagando dos veces el límite temporal comprendido entre el 08/01/2023 hasta el 28/02/2023, lo cual atenta contra el principio de reparación integral.

En consecuencia, no se encuentra acreditado (i) que el señor Samuel Mauricio Astaiza desarrollara una actividad económica y la naturaleza de la misma, (ii) si efectivamente percibía ingresos derivados de la actividad económica y su respectiva cuantía, (iii) el cese laboral del aquí demandante y (iv) que el cese laboral encontrar su causa en el accidente de tránsito en mención. No resulta entonces procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de sumas de dinero por concepto de daños patrimoniales. Lo anterior, en tanto que no existe en el plenario del proceso prueba o elemento de juicio suficiente que permita acreditar un lucro cesante.

En este orden de ideas, es preciso reiterar que la parte demandante tenía entre sus mandatos toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que sobre este particular ha establecido lo siguiente:

*“(…) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento, **y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración**, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada.³”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que **“(…) la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (…)**”⁴* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En virtud de lo expuesto, resulta claro que el extremo actor desconoció los mandatos legales y jurisprudenciales citados, dado que su estimación no obedece a un ejercicio razonado sino meramente especulativo. Razón por la cual, objeto enfáticamente el juramento estimatorio presentado por el extremo actor.

V. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

EXCEPCIONES FRENTE A LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA PASIVA

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. M.P. Margarita Cabello Barbo EXP: 2007- 0299.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villalón EXP: 2011- 0736.

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL – EL IPAT NO ES MEDIO DE PRUEBA FEHACIENTE.

Se formula esta excepción por cuanto en el presente proceso es claro que el único medio probatorio con el cual la parte demandante pretende probar la responsabilidad civil del conductor del vehículo de placas EQS583 es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil. Ello en el entendido de que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”). En consecuencia, de lo expresando, no hay lugar a declarar la responsabilidad endilgada a la pasiva por cuanto se carece de material probatorio pertinente, útil y conducente que permita al operador jurídico proferir fallo condenatorio.

Las pretensiones carecen de fundamento, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza del señor JAIRO AGUSTO CABRERA ERAZO, y por ende de mi representada. En la esfera de la responsabilidad civil implorada no se constituyen los elementos necesarios para que la misma sea predicada (daño, conducta culposa desplegada por la parte pasiva y nexo de causalidad), pues en el caso que nos ocupa, de haberse presentado algún tipo de perjuicio, éste se deriva de hechos en los que ninguna injerencia tuvo el demandado.

Igualmente, se debe señalar que en el Capítulo V de la Resolución 11268 de 2012 expedida por el Ministerio de Transporte por la cual se adopta el nuevo Informe Policial de Accidentes de Tránsito IPAT, su manual de diligenciamiento y se dictan otras disposiciones, se indica de forma clara que, en todo caso, la hipótesis que indique el agente de tránsito **NO IMPLICA RESPONSABILIDAD PARA LOS CONDUCTORES**:

Recuerde que la hipótesis indicada no implica responsabilidades para los conductores, sino que expresan las acciones generadoras o intervinientes en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentadas mediante la objetividad y el análisis técnico-científico de los elementos materiales de prueba y evidencia física encontrada en el lugar de los hechos.

El marco normativo y el manual de diligenciamiento del IPAT permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el Código General del Proceso. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el Informe Policial de Accidente de Tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas.

El IPAT no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que estos informes tienen parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente o policía como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

“(...)El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos. Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes

para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes.

- (Subrayado por fuera de texto).

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de este:

“(...) Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.”

De lo reseñado de manera precedente, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acreditó y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del evento de tránsito recae en cabeza del conductor del vehículo de placas EQS583.

En conclusión, en el caso sub examine, la parte demandante pretende atribuir responsabilidad exclusivamente con el Informe Policial de Accidente de Tránsito, el cual contiene una mera hipótesis incapaz de demostrar los elementos estructurales de la responsabilidad a cargo de la parte demandada, razón por la cual el documento no tiene la virtualidad para endilgar responsabilidad alguna a la pasiva, máxime cuando la información que se consigna allí no fue presenciada directamente por el agente de tránsito, con esto es claro que no está acreditada una conducta culposa en cabeza del señor Jairo Augusto Cabrera Erazo, resultando inverosímil el estudio del nexo causal entre la conducta del señor Cabrera y el daño reclamado.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

2. ANULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA COMO CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.

Si bien en el presente caso no se encuentra probada responsabilidad del conductor del vehículo asegurado frente a la ocurrencia del accidente de tránsito como arbitrariamente aduce la parte demandante. De manera subsidiaria y sin que lo aquí expuesto pueda entenderse como una declaración de responsabilidad, el Despacho deberá tomar en consideración que el caso concreto deberá analizarse a la luz del régimen de culpa probada, habida cuenta que corresponde al extremo actor probar el daño y la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, atendiendo a la anulación de la presunción de culpa por la concurrencia de actividades peligrosas. Lo anterior por cuanto ambos conductores desempeñaban una actividad peligrosa, pues previo a la colisión, los dos vehículos se hallaban en marcha.

Siendo así, en la misma línea de la concurrencia de culpas, es de común conocimiento que, cuando se presenta un daño a un tercero en el ejercicio de la conducción de vehículos automotores, la responsabilidad se configura a la luz de las actividades peligrosas. En efecto, ha dicho la jurisprudencia en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009 lo siguiente:

“explicó la sala, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal”⁵.

Es decir que, el Juez debe analizar la conducta de todos los intervinientes, víctimas o no, para así verificar si su comportamiento tiene incidencia en la ocurrencia de los hechos. Así mismo la Corte sostuvo que *“No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”*”. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin ésta.

Empero, no escapa a la Corte la posibilidad de una conducta culposa o dolosa del autor, de la víctima o de uno y otro en el ejercicio de una actividad peligrosa; así en los daños generados con la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá infringir las normas de tránsito, omitir las revisiones obligatorias, desplazarse a alta velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro automotor, entre otros, y, el otro, incurrir en similares comportamientos. En tales hipótesis, esas conductas apreciadas en su exacto sentido encarnan la exposición o elevación de los riesgos o peligros del ejercicio de la actividad peligrosa, los deberes de precaución o los inherentes a la posición de garante, según la perspectiva que se acoja, más no desplazan la responsabilidad al régimen general de la culpa, desde que ésta ninguna relevancia ostenta para estructurarla ni excluirla. La conducta, sea o no culposa o dolosa, se apreciará objetivamente en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del daño según el marco fáctico de circunstancias y los elementos probatorios, para determinar si es causa única o concurrente y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio. No es que se valore la culpa o el dolo en cuanto tales, ni en consideración al factor subjetivo, sino la conducta en sí misma dentro del contexto del ejercicio de una actividad peligrosa según el marco de circunstancias fácticas y los elementos probatorios.

Así las cosas, el régimen aplicable en tratándose de actividades peligrosas, no enmarca siempre una

⁵ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009. Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01.

acción maliciosa y voluntaria, por el contrario, pueden ocurrir fruto de coincidencias o algún tipo de contingencia que suelen pasar con frecuencia, por tanto no es procedente imputar responsabilidad por el simple hecho de ejercer una actividad peligrosa, sino que debe hacerse un análisis exhaustivo de los elementos que pueden tener algún tipo de inferencia en la ocurrencia, así mismo sostiene la Honorable Corte Suprema de Justicia que *“La supuesta presunción de culpa por el mero ejercicio de una actividad peligrosa, carece de todo fundamento lógico y normativo. Legal, porque ninguna parte del artículo 2356 del Código Civil, siquiera menciona presunción alguna. Lógico, porque cualquier actividad humana, y en especial, la peligrosa, puede desplegarse con absoluta diligencia o cuidado, o sea, sin culpa y también incurriéndose en ésta. De suyo, tal presunción contradice elementales pautas de experiencia y sentido común, al no ajustarse a la razón presumir una culpa con el simple ejercicio de una actividad que de ordinario como impone la razón se desarrolla con diligencia, prudencia y cuidado”*.

La doctrina ha sido clara en establecer que la colisión de actividades peligrosas se presenta cuando el daño es el resultado de la conjunción de dos culpas presuntas, es decir, que se haya producido en el ejercicio por parte de ambos adversarios de actividades, o provengan de cosas, de las cuales la jurisprudencia desprenda presunciones de culpa o con la intervención de varias personas sujetas a la dependencia de otras.

Así las cosas, en el presente caso nos encontraríamos frente a la responsabilidad con culpa probada prevista en el artículo 2341 del Código Civil, tal como lo ha establecido la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los fallos, cuyos apartes cito a continuación:

“La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos bus y tractocamión que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 del Código Civil sino el 2341 de culpa probada.”⁶

“Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 del ibidem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual.”⁷

“[...] actividad desplegada por las partes de las denominadas peligrosas, razón por la cual las presunciones sobre su culpa se neutralizan. Por ello, habrá que responsabilizar a quien se le demuestre una culpa efectiva.

(...)

La presunción de culpa, ninguna utilidad normativa o probatoria comporta al damnificado, tampoco es regla de equidad y menos de justicia, pues su único efecto jurídico es eximir de la probanza de un supuesto fáctico por completo ajeno al precepto, no menester para estructurar la responsabilidad, ni cuya probanza contraria es admisible, cuando toda presunción, salvo la iuris et de iuris que exige texto legal expreso, es susceptible de infirmar con la demostración de la diligencia y cuidado. Por tanto el juzgador con sujeción a la libre convicción y la sana crítica valorará los elementos probatorios para determinar cuál de las actividades peligrosas concurrentes es la causa del daño y la incidencia de la conducta de la víctima en la secuencia causal, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, a cuyo efecto, imputado a la

⁶ Corte Suprema de Justicia Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001. MP Silvio Fernando Trejos Bueno. Bogotá - Cra 11A No.94A-23 Of. 201 Edificio 94^a

⁷ Corte Suprema de Justicia Sentencia 5462 de 2000 MP José Fernando Ramírez Gómez.

actividad de una sola parte, ésta es responsable por completo de su reparación y si lo fuere a ambas, cada una lo será en la medida de su contribución. En otros términos, cuando la actividad peligrosa del agente es causa exclusiva del daño, éste será responsable en su integridad; contrario sensu, siéndolo la ejercida por la víctima, ninguna responsabilidad tendrá; y, si aconteciere por ambas actividades, la del agente y la de la víctima, como concausa, según su participación o contribución en la secuencia causal del daño, se establecerá el grado de responsabilidad que le asiste y habrá lugar a la dosificación o reducción del quantum indemnizatorio”⁸

Entonces para fundamentar un proceso de responsabilidad civil, no basta con solicitar una imputación objetiva entre el resultado y el acto causal, se requiere que el acto sea negligente o imprudente, y lo será aquél que infringe el deber de cuidado objetivamente exigible en la relación de la actividad peligrosa, para el caso, este deber de cuidado viene determinado por reglas especiales de tránsito y circulación de vehículos automotores.

En conclusión, tal como se desprende de la narración de los hechos de la demanda, tanto el actor como el conductor del vehículo de placas EQS583 estaban en el ejercicio de una actividad peligrosa, consistente en la conducción de un vehículo automotor, por lo tanto, concurren al suceso dañoso ejerciendo similares actividades peligrosas y en tal supuesto, se aniquilan mutuamente, forzando al actor a demostrar la culpa del conductor del vehículo asegurado.

Por lo que respetuosamente solicito al despacho tener probada esta excepción

3. HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna al demandado por los hechos acaecidos el 8 de enero de 2023, en el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de placas EQS583. Lo anterior, comoquiera que operó la causal eximente de la responsabilidad relativa al Hecho exclusivo de la víctima. Bajo esta premisa, si se demuestra que fue la conducta del conductor de la motocicleta de placas GDO834 la que generó el accidente, deberá declararse la culpa exclusiva de la víctima. Esta causal exonerativa impide atribuir el daño al extremo pasivo de la litis, lo que conlleva la improcedencia de cualquier imputación de responsabilidad en su contra.

Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, la responsabilidad civil por actividades peligrosas admite la intervención exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad, toda vez que, no se puede desconocer que la conducta bien sea positiva o negativa de la víctima pudo tener una incidencia relevante en el examen de responsabilidad civil, ya que su comportamiento podría corresponder a una condición o incluso a la producción misma del daño. La Corte lo ha explicado de la siguiente manera:

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima, fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad a los demandados, así:

“(…) La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza

⁸ Corte Suprema de Justicia Sentencia 3001 de 31 de enero de 2005 MP Pedro Octavio Munar Cadena.

*“(…) El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, **la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor** (…)”¹² (Subrayado y negrilla fuera del texto)*

En el mismo pronunciamiento del 17 de noviembre de 2020, la corte indicó lo siguiente:

“(…) La visión del asunto contenida en dicha providencia se traduce en una verdad inobjetable: si no existe nexo causal entre el daño y el actuar del demandado, resulta indudable que en ese evento no pudo mediar culpa o dolo de su parte, dado que, finalmente, a nadie puede atribuirse falta alguna por un hecho que no tiene ninguna relación con su conducta (…)”
¹³(Subrayado y negrilla fuera del texto)

Teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, es dable concluir que de mediar un “hecho exclusivo de la víctima”, el presunto responsable y generador del daño será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. Para el caso que nos ocupa, es totalmente claro que en caso de que la conducta del señor Samuel Mauricio Astaiza, fuese factor relevante y adecuado que incidió en las lesiones por él sufridas, resultará jurídicamente inviable imputarle responsabilidad a los Demandados. Por tanto, deberá el honorable juez proceder a negar las pretensiones de la demanda.

El Despacho debe advertir que el Informe Policial de Accidente de Tránsito atribuye una causal exclusivamente por el supuesto estado de embriaguez por parte del conductor del vehículo No. 1 de placa EQS583, sin embargo este mero estado no constituye la causal de ocurrencia del accidente pues no existió un análisis frente a la dinámica de los hechos, dejando abierto el debate probatorio frente a la verdadera responsabilidad en la ocurrencia del siniestro, la cual no se atribuye de manera clara a alguno de los vehículos, dejando abierta la interpretación frente a la verdaderamente ocurrido, máxime cuando no se determinó una hipótesis por lo menos indicativa de cuál de los vehículo fue el que invadió el carril en sentido contrario.

10. TOTAL FOLIOS: _____

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR: V# 1115

DEL VEHÍCULO DE LA VÍA: _____

DEL PEATÓN DEL PASAJERO: _____

OTRA: _____ ESPECIFICAR LA CAUSAL: _____

TODA PERSONA RESERVADA

Ahora, es importante recalcar que la autoridad de tránsito en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, determino unos puntos de contacto entre los vehículos involucrados en el hecho, evidenciando que determinó:

- Vehículo No. 1 EQS583 - Descripción de daños: “ luces delanteras rotas, para golpe delantero roto,

¹² Corte Suprema de Justicia. SC4420-2020. Expediente 2011-00093. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Bogotá - Cra 11A No.94A-23 Of. 201 Edificio 94ª

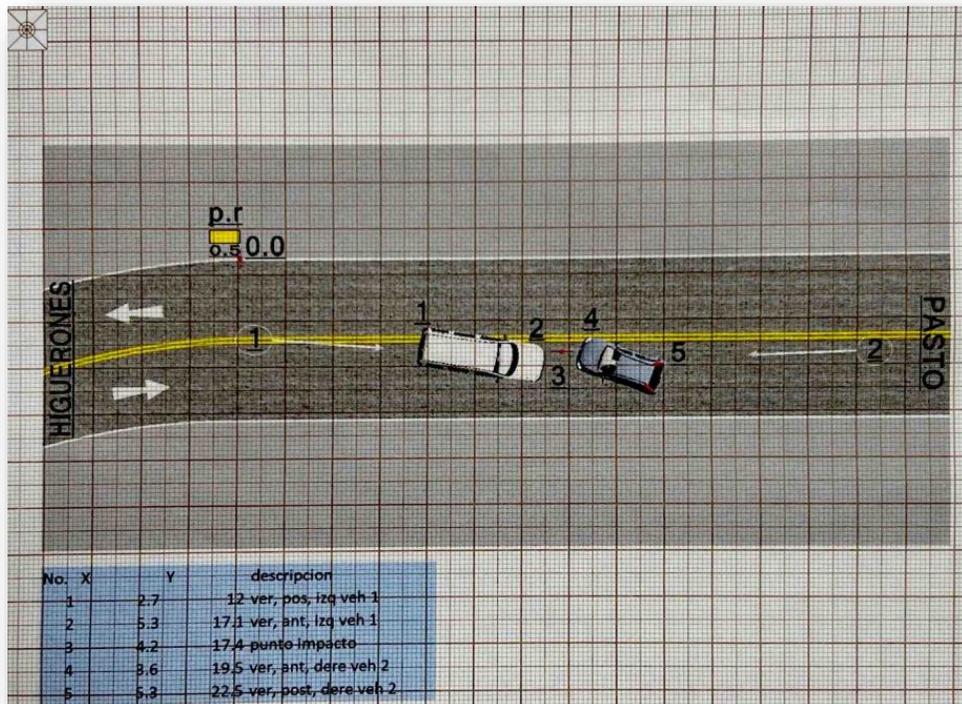
¹³ Ibidem

abolladura cap., abolladuras guardabarros delantero”:

- Vehículo número 2 de placa GDO834 – Descripción de daños: “Luces delanteras rotas, para golpe delantero roto, abolladura capo, vidrio panorámico roto, guardabarros delantero rojo”. Señalando adicional en la casilla 8.9. Lugar del impacto la sección frontal, así

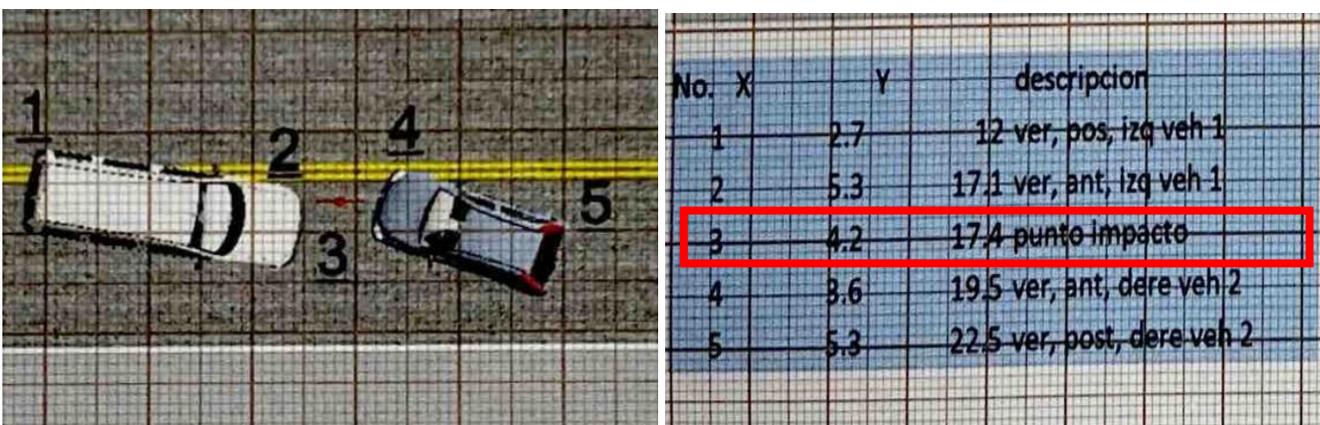
Lo anterior, permite identificar que el tipo de colisión que se presentó fue un impacto frontal que afectó la totalidad del ancho de ambos vehículos como quedó registrado en el IPAT, lo que sería indicativo de una colisión donde los ejes de los vehículos se encontraban alineados, razón por la cual uno de los automotores debió invadir el carril del otro. Ahora bien, como se logra evidenciar en el bosquejo topográfico elaborado por la autoridad de tránsito, no cabe duda que, la colisión e incluso el PUNTO DE IMPACTO determinado por el agente se ubica en el carril que conduce de HIGUERONES hacia PASTO, es decir el carril por el cual se desplazaba el vehículo de placa EQS583, razón por la cual fue el vehículo de placa GDO834 el automotor que invadió el carril en sentido contrario y causante del impacto frontal.

Debe resaltarse, que fue la autoridad de tránsito quien además determinó como recorrido del vehículo de placa GDO834 sobre el carril izquierdo de la ruta PASTO – HIGUERONES, es decir que el automotor del hoy demandante fue el vehículo que circuló en sentido contrario, infringiendo la normatividad de tránsito y causando el accidente, al respecto véase:

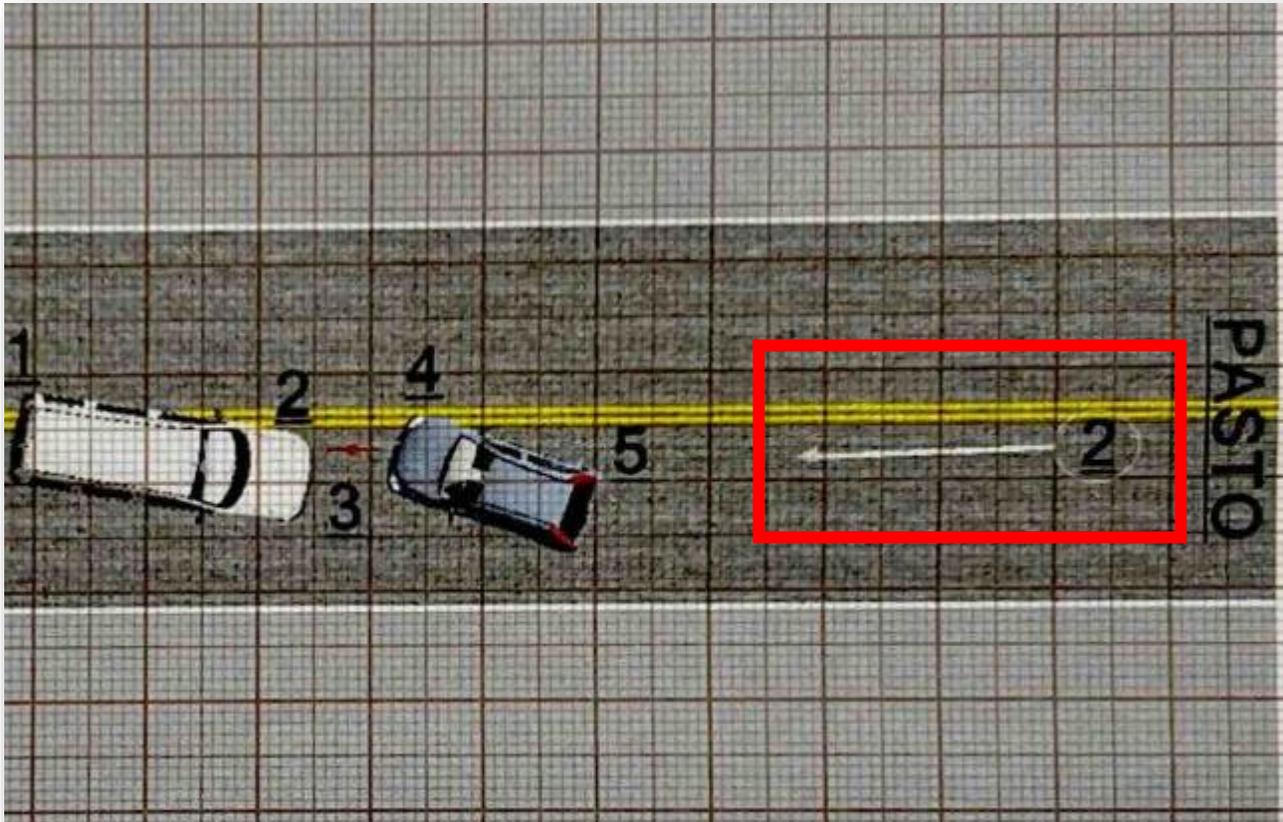


Conforme la imagen anterior, véase como de forma clara y sin lugar a duda ambos vehículos finalizaron sobre el carril derecho del sentido HIGUERONES – PASTO, es decir que quedaron sobre el carril de circulación del automotor de placa EQS583, quien se movilizaba por su respectivo carril, más no como lo alega la parte activa, quien refiere que fue el demandado quien invadió su carril.

Véase también como el agente de tránsito que elaboró el informe, dentro de sus acotaciones refirió como elemento número 3 y bajo la descripción (PUNTO IMPACTO) una elemento que se ubica sobre el carril derecho sentido HIGUERONES – PASTO, es decir que para el agente de tránsito el contacto entre estos vehículos se presenta sobre el carril de circulación del automotor de placa EQS583, dejando saldada cualquier duda frente a que vehículo fue el que invadió el carril:



Igualmente, es importante advertir que de acuerdo al bosquejo topográfico donde se plasman las posiciones finales de los vehículos involucrados, se evidencia que el vehículo tipo automóvil de placa GDO834, conducido por el hoy demandante, tiene una referencia de circulación sobre el carril sentido PASTO – HIGUERONES, es decir para el agente de tránsito el automotor referido circulaba en sentido contrario en contravía y en una zona con prohibición para adelantamiento, extraña entonces cual fue la razón para que no se le asignará hipótesis alguna a este actor vial que claramente tuvo una total influencia en la ocurrencia del accidente:



Así, en caso de que se demuestre que esta conducta codificada por este documentos hubiese sido realizada por el vehículo GDO834, no podría entonces ser imputable al conductor del vehículo EQS583, ni mucho menos a la compañía aseguradora que represento, por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera del dominio de la víctima y no de los demandados.

En conclusión, tras el análisis fáctico y normativo del caso, encontramos que si se llegase a demostrar que fue el vehículo GDO834 el cual realizó una conducta imprudente, negligente e irresponsable, es completamente evidente ante la lógica fáctica de los sucesos ocurridos, se declare que los causantes del accidente de tránsito fueron justamente las víctimas por su actuar imprudente, irresponsable y negligente y, en consecuencia, se deberán negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, solicito señor Juez se tenga como probada esta excepción

4. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE.

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral por una cuantía de cuarenta salarios mínimos para el demandante, máxime considerando que la naturaleza de las lesiones padecidas por el señor Samuel Mauricio Astaiza, que fueron determinadas como incapacidad permanente parcial. Además, las sumas solicitadas superan los baremos que jurisprudencialmente la Corte suprema de Justicia ha establecido para el particular.

Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de la parte activa, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Siendo de recordar que para el reconocimiento de cualquier tipología de perjuicio ha de encontrarse acreditado la existencia y cuantía del daño, circunstancia que no se presenta en el caso que nos ocupa comoquiera que en el plenario no milita prueba alguna que permita colegir la afectación sufrida por el demandante con ocasión a los hechos del 08 de enero de 2023.

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios “se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e incommensurables”¹⁴ Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que se encuentra encaminado a “reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares”¹⁵, con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia¹⁶.

Inicialmente, se debe advertir al Despacho que existe una desmesurada solicitud de perjuicios morales por la suma total de 40 salarios mínimos para el demandante, lo cual es a todas luces improcedente, puesto que refleja un evidente ánimo especulativo y una errónea tasación de los perjuicios, en tanto que los mismos resultan exorbitantes según los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte actora, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

Para ilustrar de forma puntal la manera en que la que Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación un caso particular. Así pues, en la sentencia SC 4701 de 2021, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Ordinaria tasó el daño moral padecido por el cónyuge e hijos en \$47.472.181 a causa del fallecimiento en accidente aéreo de su esposo y padre. En un caso similar, se reconoció la suma de \$55.000.000 a título de daño moral para el cónyuge supérstite y los hijos con ocasión de la muerte derivada de un accidente de tránsito¹⁷, ambos eventos en los cuales se tasó el daño moral generado por el deceso de la víctima, circunstancia que no corresponde al caso objeto de estudio toda vez que el señor Samuel Mauricio Astaiza sufrió lesiones catalogadas bajo una incapacidad permanente temporal.

Por lo antes expuesto es claro que la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la parte demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

*“(…) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño, **lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable**. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico(…)”¹⁸. (Negrillas fuera del texto).*

Cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia no ha establecido sus baremos en la unidad de Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes si no que, lo ha hecho en cantidades ciertas que solo varían si la

¹⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2008, Exp. 1997-00327-01

¹⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P.: Luis Amancio Potesa Villabona)

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de diciembre de 2020.

¹⁸ Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Prueba de los Perjuicios Morales Subjetivados. Pág. 508.

Corte lo considera necesario en pronunciamientos futuros, así pues, no es pertinente que los demandantes pidan una compensación tasada mediante SMLMV, cuando la jurisprudencia expresamente ha tasado en valores reales y no sujetos a indexación el valor que se otorga si su pretensión de resarcimiento de perjuicios prospera.

En suma, no es jurídicamente posible acceder a la indemnización de perjuicio solicitada por el demandante que asciende a 40 SMLMV toda vez que: (i) Es exorbitante con respecto a los máximos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, (ii) Los baremos de la corte están establecidos en montos ciertos de dinero y no en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigente, luego no es procedente solicitar una indemnización de esta forma y (iii) deberá aportarse prueba de su acreditación.

Amén de lo anterior, teniendo en cuenta la ausencia de prueba del perjuicio realmente sufrido, es necesario traer a colación la sentencia SC 5885 de 2016, mediante la cual el Máximo Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria tasó el daño moral para los padres, hermanas y la víctima directa en quince millones de pesos (\$15.000.000) para cada uno, a causa de la perturbación psíquica, deformidad física permanente y pérdida de capacidad laboral en un 20.65%, de estudiante universitaria menor de edad, generadas por la colisión entre un vehículo de servicio público y la motocicleta que aquella conducía, siendo un caso análogo al que aquí se discute.

Por lo anteriormente mencionado, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, así como los pronunciamientos y manifestaciones realizadas por los sujetos intervinientes en cada uno de sus escritos, no pueden ni deben ser indemnizados por mi representada, ya que su presunta causación no se encuentra debidamente probada en ninguna de las modalidades por perjuicio extrapatrimonial, además de que, resultan abiertamente indebida e injustificada la desmesurada solicitud de perjuicios morales por suma total de 40 SMLMV a la luz de los presupuestos configurativos que permiten estructurar el origen de este tipo de perjuicios.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

5. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE SOLICITADO

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el proceso de la referencia no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente, por cuanto no se acreditó la responsabilidad en la ocurrencia del accidente de tránsito en cabeza de los demandados, y por contera no le asiste responsabilidad a Seguros Generales Suramericana S.A. Anudado a lo anterior, tampoco se allegó medio de prueba que acredite siquiera sumariamente los emolumentos supuestamente pagados por el señor Samuel Mauricio Astaiza por concepto de daño emergente, así como tampoco se probó la frustración del contrato cuyos honorarios se pretenden bajo la modalidad de daño emergente.

El daño emergente ha sido desarrollado jurisprudencialmente como la tipología de perjuicios que comprende la pérdida de elementos patrimoniales como consecuencia de los hechos dañosos, sin embargo, ha establecido ampliamente que para la procedencia del reconocimiento de los mismos resulta totalmente necesario acreditarlos dentro del proceso, carga que le asiste al reclamante de los perjuicios. Bajo estos derroteros, en el caso particular es completamente improcedente reconocimiento alguno a título de daño emergente, por cuanto no existe prueba cierta, clara y suficiente que acredite las sumas solicitadas por el extremo actor.

Es claro que la parte demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en el escrito genitor del proceso. Por lo tanto, la cuantía de los daños por los cuales se está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los

medios idóneos que la ley consagra en estos casos. A efectos de entender la tipología de dichos perjuicios, vale la pena recordar lo indicado por la honorable Corte Suprema de Justicia con respecto a la definición del daño emergente en los siguientes términos:

“(…) De manera, que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Dicho en forma breve y precisa, el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado; en cambio, el lucro cesante tiende a aumentarlo, corresponde a nuevas utilidades que la víctima presumiblemente hubiera conseguido de no haber sucedido el hecho ilícito o el incumplimiento (…)”

Es claro que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, para la procedencia de reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente, es necesario que el reclamante demuestre mediante prueba suficiente que se trata de perjuicios ciertos y no hipotéticos. Lo que no sucede en el caso de marras, en tanto que la parte demandante no prueba sumariamente la causación de dicho perjuicio. De tal manera que, la consecuencia jurídica a la falta al deber probatorio en cabeza del demandante es sin lugar a duda la negación de la pretensión.

Ciertamente, en el caso de marras no hay lugar a reconocer las sumas pretendidas por daño emergente debido a que, por una parte, no se aportó prueba documental que demuestre que efectivamente se causaron erogaciones por insumos médicos no cubiertos por la EPS pues, si bien en el escrito de demanda se hace referencia a “facturas canceladas”, las mismas no fueron allegadas y, por la otra, tampoco se encuentra acreditada la frustración de los honorarios devengados con ocasión al mentado contrato.

En suma, acceder a la pretensión relativa al daño emergente contraviene el carácter cierto del daño comoquiera que en el caso objeto de estudio la parte actora no aporta medios que prueben siquiera sumariamente la pérdida efectiva patrimonial asumida por el señor Samuel Astaiza con ocasión a los hechos del 08 de enero de 2023.

Por todo lo anterior, solicito señor juez tener por probada esta excepción.

6. INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL LUCRO CESANTE.

En el caso objeto de estudio no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro toda vez que, la parte actora no demuestra fehacientemente los ingresos devengados para el momento en que acaeció el accidente de tránsito, así como tampoco se encuentra acreditado el cese laboral del señor Astaiza con ocasión al supuesto hecho dañoso. En ese sentido y afectos de lograr una mayor claridad, se procederá a dividir esta excepción de la siguiente manera:

- *Improcedencia del Lucro Cesante Futuro.*

Frente al particular lo primero que parece necesario advertir es que en el caso de marras no es procedente el reconocimiento de esta tipología de perjuicio toda vez que para ello se requiere tener certeza sobre la utilidad económica frustrada, lo cual no se encuentra demostrada en el presente litigio comoquiera que no se encuentra debidamente acreditado que el señor Samuel Mauricio Astaiza percibiera ingresos con anterioridad a los hechos del 08 de enero de 2022 y, consecuentemente, no puede

predicarse el respectivo cese laboral. Ahora bien, se precisa que el contrato de prestación de servicios allegado no constituye prueba plena para predicar la actividad económica del aquí demandante toda vez que el plazo pactado fue por un mes y veintinueve días y, en todo caso, el señor Astaiza figura como afiliado al régimen subsidiado de salud, de lo cual se colige la ausencia de capacidad de pago.

Frente al lucro cesante futuro la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“(..). El lucro cesante actual no ofrece ninguna dificultad en cuanto hace a la certidumbre del daño ocasionado, pues, como viene de explicarse, se trata de la ganancia o del provecho no reportado al patrimonio del interesado, como hecho ya cumplido. En cambio, en el lucro cesante futuro, precisamente, por referirse a la utilidad o al beneficio frustrado cuya percepción debía darse más adelante en el tiempo, su condición de cierto se debe establecer con base en la proyección razonable y objetiva que se haga de hechos presentes o pasados susceptibles de constatación, en el supuesto de que la conducta generadora del daño no hubiere tenido ocurrencia, para determinar si la ganancia o el provecho esperados, habrían o no ingresado al patrimonio del afectado (...)”¹⁹ (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

En ese sentido, es claro que para la Corte no basta una simple afirmación de que se dejará de percibir cierto emolumento, dicha afirmación debe ser respaldada por pruebas que demuestren la afectación que produjo la lesión padecida frente al supuesto detrimento respecto a, para el caso concreto, los salarios que dejaría de percibir. Así las cosas, es claro que para reconocer el monto indemnizatorio pretendido es menester tener certeza sobre la utilidad frustrada con ocasión al hecho dañoso, lo cual no se presenta en el caso de marras debido a que la parte actora no allega pruebas cuya valoración en conjunto permita inferir los ingresos devengados por el señor Samuel Mauricio Astaiza con antelación al accidente de tránsito objeto de litigio. En consecuencia, no es procedente que el Despacho conceda la petición incoada.

Adicionalmente, debe señalarse que es erróneo tomar como base de liquidación los honorarios devengados por el periodo temporal comprendido por un mes y veintinueve días para la proyección de la ganancia futura pues con los documentos aportados no se puede colegir que el señor Samuel Mauricio Astaiza devengara en un futuro dicha suma, máxime teniendo en cuenta que conforme la información que reposa en la Adres, el señor Astaiza se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud con anterioridad a los hechos del 08 de enero de 2023.

A título de colofón, no hay lugar a reconocer suma alguna por la modalidad de daño aquí referida debido a que no se encuentra acreditado (i) que el señor Samuel Mauricio Astaiza desarrollara una actividad económica y la naturaleza de la misma, (ii) si efectivamente percibía ingresos derivados de la actividad económica y su respectiva cuantía, (iii) el cese laboral del aquí demandante y (iv) que el cese laboral encontrar su causa en el accidente de tránsito en mención, Lo anterior, resaltando que, en todo caso, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral no representa una invalidez que le impida al demandante acceder al mercado laboral.

- Improcedencia del lucro cesante consolidado

Por otro lado, resulta improcedente reconocer perjuicio alguno a título de lucro cesante consolidado toda

¹⁹ Corte Suprema de Justicia, sentencia del 9 de septiembre de 2010, expediente No. 17042-3103-001-2005-00103-01
Bogotá – Cra 11A No.94A-23 Of. 201
Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212
Centro Empresarial Chipichape
+57 315 577 6200 - 602-6594075

vez que, para ello es necesario demostrar de forma inequívoca que la víctima directa, en este caso, el señor Samuel Mauricio Astaiza, devengaba algún emolumento como secuencia del ejercicio de alguna actividad económica. En ese sentido, al no existir prueba de que la víctima tuviera un ingreso que perdió como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, no es procedente conceder suma alguna a título de lucro cesante consolidado.

Para empezar, debe hacerse remembranza sobre los aspectos fundamentales que configuran el lucro cesante. Éste se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

Para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“(...) en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (...) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afianza en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...)

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (...).”²⁰
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente.

En conclusión: (i) no hay lugar al reconocimiento del lucro cesante por cuanto no se acredita el cese laboral del señor Samuel Mauricio Astaiza; y, (ii) debido a que no se acredita el ingreso que percibía antes de que acaeciera el accidente En consecuencia, no hay lugar a que el Despacho proceda con el reconocimiento de indemnización a título de lucro cesante consolidado y futuro para el peticionario. Lo anterior, habida cuenta que, por no encontrarse probado un factor determinante para el reconocimiento de esta tipología de perjuicios, su reconocimiento es a todas luces improcedente por ausencia de pruebas que acrediten que la víctima dejó de percibir su salario y que como consecuencia del accidente haya quedado cesante laboralmente, elemento de vital importancia para la eventual tasación de esta tipología de perjuicio. En ese sentido, es claro que las pretensiones encaminadas a obtener un reconocimiento por estos conceptos no están llamadas a prosperar, puesto que no siguen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual

²⁰ Corte Suprema de Justicia. Sentencia Radicado 2000-01141 de 24 de junio de 2008.

del lucro cesante consolidado y futuro.

Por todo lo anterior, solicito señor juez tener por probada esta excepción.

7. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y LOS DEMÁS SUJETOS QUE INTEGRAN LA PARTE DEMANDADA.

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia²¹ ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte²² igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

***(...) La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (...)* (Negrilla y sublínea fuera de texto).

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

²¹ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez

²² Ibidem

CAPITULO II
CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO

FRENTE AL HECHO “PRIMERO”: Es cierto que el señor JAIRO AUGUSTO ERAZO suscribió en calidad de tomador y asegurado la póliza de Seguro de Autos Plan Utilitarios y Pesados No. 900000757313 con vigencia entre el día 13 de mayo de 2022 y hasta el 13 de mayo de 2023 con amparo para el vehículo de placa EQS583. Sin perjuicio de lo anterior debe manifestarse que no se aportaron al expediente elementos de convicción suficientes que acrediten la responsabilidad que pretende atribuirse a la pasiva en esta acción, como quiera que (i) no se ha demostrado la existencia de responsabilidad en cabeza del vehículo de placa EQS584 (II) no se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta del conductor del vehículo de placa EQS584 y el daño deprecado por el demandante, más cuando el único elemento en que basan los demandantes dicha responsabilidad, es el informe policial de accidente de tránsito, no existiendo forma certera y fehaciente de acreditar la responsabilidad de la pasiva, por lo que consecuentemente no se ha estructurado el riesgo asegurado.

FRENTE AL HECHO “SEGUNDO”: Es cierto que la póliza plan utilitarios y pesados No. 900000757313 tiene amparo de “daños a terceros”. Sin embargo, la viabilidad jurídica de afectarla dependerá en primer lugar de que se realice el riesgo asegurado, en este caso, que la persona autorizada para conducir sea declarada civilmente responsable. Así mismo se deberá tener en cuenta las condiciones generales del contrato de seguro en su integridad incluyendo las exclusiones de amparo.

FRENTE AL HECHO “TERCERO”: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser aprobado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, en observancia del Informe Policial de Accidente de Tránsito que reposa en el expediente se constata que el 08 de enero de 2023 aconteció un accidente de tránsito que involucró los vehículos de placas EQS583 y GDO834, conducidos en su orden, por Jairo Augusto Cabrera Erazo y Samuel Mauricio Astaiza Chávez.

FRENTE AL HECHO “CUARTO”: Es cierto. Sin embargo, la cobertura de esta póliza dependerá en primer lugar de la realización del riesgo asegurado, así mismo se deberá tener en cuenta la aplicación de las condiciones generales del contrato y la existencia de cualquier exclusión establecida en el negocio asegurativo. En el caso que nos ocupa no está demostrada la materialización del riesgo, luego no es jurídicamente viable afectar el seguro.

FRENTE AL HECHO “QUINTO”: Es cierto. De conformidad con lo indicado en el libelo de la demanda, así como en las actuaciones procesales surtidas dentro del presente litigio.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “PRIMERA”: Por tratarse de una pretensión encaminada a un trámite procesal que ya fue surtido, como lo es la admisión del llamamiento en garantía proferido por este despacho a través de providencia No. 751 del día 27 de mayo de 2025, no hay lugar a pronunciamiento de fondo.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEGUNDA”: ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión incoada en el llamamiento en garantía, por cuando no se vislumbran los elementos sine qua non para predicar, como exigible, la obligación indemnizatoria de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Si bien el señor JAIRO AUGUSTO ERAZO suscribió en calidad de tomador y asegurado la póliza de Seguro de Autos Plan Utilitarios y Pesados No. 900000757313 con vigencia entre el día 13 de mayo de 2022 y hasta el 13 de mayo de 2023 con amparo para el vehículo de placa EQS583, lo cierto es que la póliza no puede afectarse como quieta que: que (i) no se ha demostrado la existencia de responsabilidad en cabeza del vehículo de placa EQS583 (II) no se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta del conductor del vehículo de placa EQS583 y el daño deprecado por el demandante, más cuando el único elemento en que basan los demandantes dicha responsabilidad, es el informe policial de accidente de tránsito, no existiendo forma certera y fehaciente de acreditar la responsabilidad de la pasiva, por lo que consecuentemente no se ha estructurado el riesgo asegurado.

Así mismo la cobertura de esta póliza dependerá de la realización del riesgo asegurado, teniendo en cuenta la aplicación de las condiciones generales del contrato y la existencia de cualquier exclusión establecida en la póliza.

III. EXCEPCIONES DE FONDO

8. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS QUE IMPONE EL ARTÍCULO 1077 DEL C. DE CO.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es necesario que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. El Seguro de Autos Plan Utilitarios y Pesados No. 900000757313 cuenta con amparo de “daños a terceros”, el riesgo asegurado a través de éste consiste en que la persona autorizada para conducir sea declarada civilmente responsable. En este caso no existe ningún elemento que acredite la responsabilidad del conductor del vehículo de placas EQS583 en la ocurrencia del accidente del 8 de enero de 2023 y mucho menos se ha probado de manera fehaciente el valor de los perjuicios deprecados. Consecuentemente, debe indicarse de manera enfática que no ha nacido la obligación indemnizatoria a cargo de mi representada.

Para efectos de las reclamaciones por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante, quien en calidad de beneficiaria pretende una indemnización. En ese sentido el artículo 1072 del Código de Comercio establece:

“(...) ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado (...)”.

En cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado la doctrina respetada sobre el tema:

“(...) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador-

“da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible”

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual, si fuera poco, emerge pura y simple. Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.***

(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”

“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir el proceso declarativo, y es cierto; pero, aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende a la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago”²³ (C. de Co. Art. 1080) (…)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Pues que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

“(…) 2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.

2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Clausula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (clausula décima, condiciones generales, contrato de seguro).

2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).

2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de danos, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para el fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.) (…)²⁴

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida

²³ Álvarez Gómez, Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fideicomiso, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

²⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC2482-2019. Radicación n.º 11001431603008200540077-01. Julio 9 de 2019

que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se ha probado este factor, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

- **Frente a la póliza No. 900000757313**

Sin perjuicio de las excepciones de fondo planteadas en contra de la demanda, se precisa que, de acuerdo con lo estipulado en las condiciones específicas de la póliza, de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Se aclara que, mediante el referido contrato de seguro, en virtud del cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado como consecuencia de un accidente de tránsito en los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones del contrato de seguro, de la siguiente manera:

SURA pagará los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que sean consecuencia de daños que le sean causados a otra persona o a sus bienes derivados de un accidente con:

- a) El vehículo asegurado cuando usted lo estaba manejando.
- b) El vehículo asegurado cuando lo estaba manejando una persona a la que usted haya autorizado para conducirlo.
- c) El vehículo asegurado cuando se haya desplazado solo.
- d) Un tráiler que sea halado por el vehículo asegurado.
- e) Un vehículo diferente del vehículo asegurado si el asegurado lo estaba conduciendo debidamente autorizado.

Esta cobertura está condicionada a que usted o la persona autorizada para conducir el vehículo, sea civilmente responsable frente a la persona a la cual se le causaron los daños y que esta responsabilidad no se derive de un contrato.

De conformidad con lo estipulado en las condiciones de la Póliza No. **900000757313** podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó, pues, mediante la póliza en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado cuando deba asumir un daño derivado de una reclamación basada en una responsabilidad de carácter extracontractual y de la cual se pretenda obtener una indemnización. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues ante la inexistencia de nexo causal entre las conductas desplegadas por el conductor del vehículo asegurado y el daño reclamado por la parte actora, no procede reclamación alguna con cargo a la póliza de seguro, puesto no se han reunido los elementos esenciales para que sea procedente declarar la responsabilidad civil extracontractual.

9. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO PLAN UTILITARIOS Y PESADOS No. 900000757313.

Es menester advertir que en las condiciones pactadas en el contrato de seguro documentado en la Póliza de Seguro Plan Utilitarios y Pesados No. 900000757313 suscrita entre mi representada y el señor JAIRO AUGUSTO CABRERA ERAZO, se establecieron unos parámetros que enmarcan la obligación condicional y la delimitación de la extensión del riesgo asumido por Seguros Generales Suramericana S.A. En efecto, en ella se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que se excluyen de amparo, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“En efecto, no en vano los artículos 1056²⁵ y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad.

Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos.”²⁶

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

*“Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros. **Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo,** mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “comprende todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos” (Se subraya), luego, **en este último negocio asegurativo, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes**”²⁷ — (Subrayado y negrilla por fuera de texto.*

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio:

*“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos, **en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado preestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador.** Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de,*

²⁵ Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”

²⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC4527-2020. M.P. Francisco Tenorio Bahantes

²⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Exp. 2006-5492-0-602634-0 Carlos Ignacio Jaramillo.

«a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado»²⁸ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Así las cosas, según la jurisprudencia previamente expuesta, se evidencia como se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. Razón por la cual, es necesario señalar que en Póliza de Seguro Plan Utilitarios y Pesados No.900000757313, emitida por Seguros Generales Suramericana S.A. en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones que de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza de Seguros Generales Suramericana S.A. por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación del Contrato de Seguro, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones respecto a mi mandante.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

10. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DEL CONTRATO DE SEGURO.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo, de modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado.

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

*“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”*²⁹ (Negrilla por fuera de texto).

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” - (Subrayado y negrilla por fuera de

²⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5327-2018. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rizo Páez. Edificio 94^a

²⁹ Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. Edificio 94^a

texto).

A su vez, el artículo 1127 ibidem, dispone lo siguiente:

*“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador **la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley** y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.” - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).*

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, dentro del cual la activa prende el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:

- La suma de \$6.428.799 por concepto de daño emergente, la cual es improcedente debido a la ausencia de medios probatorios que acrediten, primeramente, los insumos médicos asumidos por el aquí demandante y, acto seguido, la frustración económica del contrato de prestación de servicios suscrito por el señor Samuel Astaiza.
- La suma de \$148.233.451 por concepto de lucro cesante, la cual es improcedente pues el señor Samuel Astaiza no certifica fehacientemente que se encontraba laborando para el momento en que acaeció el accidente de tránsito, así como tampoco se encuentra acreditado el cese laboral de la señora Astaiza. Anudado a lo anterior, es incorrecto tomar como base de liquidación la suma de \$2.100.000 pues se tasó con base en un contrato de prestación de servicios con plazo definido de un mes y veintinueve días, máxime cuando incluso no se referenció contratos previos y la información que registra en la Adres indica que el señor Samuel Mauricio Astaiza se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado de Salud desde el 12 de marzo de 2021, esto es, con anterioridad a los hechos que suscitaron el presente litigio.
- 40 SMLMV por concepto de daño moral, los cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre congoja causada al demandante con ocasión al hecho acontecido el 08 de enero de 2023 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activan desconocen los baremos jurisprudenciales

Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado del demandante. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante consolidado y futuro, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguro.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

11. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA No. 900000757313, CON SUS SUBLÍMITES.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de Seguros Generales Suramericana S.A. en virtud de la póliza vinculada. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“(...) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (...).”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(...) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (...).”³⁰

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza No. 900000757313:

³⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5952. Diciembre 14 de 2001.

COBERTURAS DE TU SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Limite	\$ 0	\$ 1,640,000,000
	Deducible		
Asistencia	Asistencia	\$ 0	Asistencia Utilitarios

Documento de: Póliza Nueva

Documento: Póliza No. 900000757313

No obstante, tal como se indicó en el Clausulado General, en tratándose de accidentes que ocasionen lesiones a un tercero, el seguro opera en exceso del SOAT y los pagos realizados por el Sistema de Seguridad Social.

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis Seguros Generales Suramericana S.A. no puede ser condenada. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites, sublímites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho, declarar probada la presente excepción.

12. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

13. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del Código General del Proceso, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

IV. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS DEL DEMANDANTE

1. RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: "(...) Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (...)".

Por supuesto, esta ratificación concebida en la legislación procesal actual, le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener que lo ratifiquen sus respectivos autores, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga

en sus hombros la carga de hacerlos ratificar de quien los obtuvo o creó, si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo; y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y son los siguientes:

1. Contrato de Prestación de Servicios No. 046-2023, celebrado entre el Centro de Salud San Isidro Empresa Social del Estado y Samuel Mauricio Astaiza Chaves.

V. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

a. DOCUMENTALES

- i. Copia de la Póliza de Seguro Plan Utilitarios y Pesados No.900000757313
- ii. Condicionado general aplicable a la póliza No. No.900000757313, contenido en la forma F- 0140-207

b. INTERROGATORIO DE PARTE

- i. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio al señor **SAMUEL MAURICIO ASTAIZA CHAVES**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor **SAMUEL MAURICIO ASTAIZA CHAVES** podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- ii. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **JAIRO AUGUSTO CABRERA ERAZO** en su calidad de demandado, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor **JAIRO AUGUSTO CABRERA ERAZO** podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en su contestación.

c. DECLARACIÓN DE PARTE

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza de Seguro Plan Utilitarios Y Pesados No. 900000757313.

d. TESTIMONIALES

- i. Solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Pt. Cesar López Rodríguez, agente de la Policía Nacional, identificado con cédula de ciudadanía No. 1015403607 y placa 081024 (Secretaria de Tránsito y Transporte de Tangua – Nariño) para que declare sobre los

aspectos técnicos y normativos usados en la elaboración del informe policial de accidente de tránsito IPAT No. C01470614, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las Excepciones propuestas en este escrito. Respetuosamente solicito al respetado despacho citar a este funcionario público bajo el poder discrecional que lo ampara.

- ii. Solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, asesora externa de mi procurada, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán y puede ser citada en la Carrera 32 bis No. 4 16 Popayán y correo electrónico darlingmarcela1@gmail.com para que declare sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza Seguro No. 900000757313 los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.

e. DICTAMEN PERICIAL

En los términos del artículo 227 del Código General del Proceso anuncio que haré uso de la prueba pericial consistente en la reconstrucción de accidente de tránsito a fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el accidente del 8 de enero de 2023 y apoyar la tesis sustentada en esta contestación consistente en que las causas del accidente son imputables a la propia víctima. Anuncio el uso de esta prueba en los términos antes referidos, comoquiera que, el término de traslado es insuficiente para aportar un dictamen de esta categoría

La prueba pericial es conducente, pertinente y útil por cuanto es funcional para verificar desde un punto de vista técnico, los hechos acaecidos el 8 de enero de 2023, donde se vio involucrado el vehículo de placas EQS583 y el vehículo de placa GDO834. Criterio técnico que permite acreditar la ocurrencia y causas del accidente a partir de una óptica científica en uso de la física y otras ciencias aplicadas que permiten reconstruir fielmente las situaciones e hipótesis que rodearon el accidente de tránsito el cual es objeto del litigio.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juez proceder de conformidad.

f. INTERENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

VI. ANEXOS

- Documentos referidos en el acápite de pruebas

- Poder especial otorgado por Seguros Generales Suramericana S.A.
- Certificado de existencia y representación legal de Seguros Generales Suramericana S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Medellín.
- Certificado de Existencia y Representación legal de Seguros Generales Suramericana S.A. expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

VII. NOTIFICACIONES

- Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda.
- Mi representada Seguros Generales Suramericana S.A. recibirá las notificaciones en la Carrera 63 No. 49 A — 31, Piso 1 Edificio Camacol, en la ciudad de Medellín.

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@suramericana.com.co

- El suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35 N - 100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali.

Correo electrónico: notificaciones@gha.com.co.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.